

REPUBLICA POPULAR CHINA
LA REPRESION CONTINUA: 3. LA PENA DE MUERTE
Y LAS CAMPAÑAS CONTRA LA DELINCUENCIA

SEPTIEMBRE DE 1990

RESUMEN

INDICE AI: ASA 17/56/90/s

DISTR: SC/CO/GR

Actualmente la aplicación de la pena capital en la República Popular China es más frecuente de lo que ha sido durante muchos años. El número de personas condenadas a muerte y ejecutadas en los últimos 12 meses ha alcanzado el nivel más alto desde 1983.

Basándose en informes de los medios de comunicación oficiales, Amnistía Internacional ha registrado más de 720 condenas a muerte impuestas entre enero y mediados de agosto de 1990. Estas condenas incluyen más de 70 penas capitales con un aplazamiento de la ejecución de dos años (en estos casos, cabe la posibilidad de que a los presos que se considere que han mostrado "arrepentimiento" se les conmute la pena por cadena perpetua después de dos años). Sólo en junio y julio de 1990 se registraron más de 350 penas capitales, impuestas en el contexto de las sucesivas campañas contra la delincuencia que se han iniciado desde la represión de los manifestantes en favor de la democracia el año pasado.

Estas campañas se emprendieron tras la severa represión del verano y el otoño de 1989 contra personas acusadas de haber participado en actos violentos relacionados con el movimiento prodemocrático de los meses precedentes. Algunos presos fueron ejecutados por delitos de relativa importancia, o por delitos que no incluían el uso de la violencia, sólo porque dio la casualidad de que la celebración de los juicios coincidió con una campaña contra la delincuencia.

En 1989, el número de condenas a muerte registradas por Amnistía Internacional superó las 370. Según los informes, en 1990, de las más de 650 penas de muerte sin aplazamiento de la ejecución registradas entre enero y mediados de agosto, más de 350 se impusieron en junio y julio. Al parecer, de éstas, más de 270 se han llevado a cabo. En algunos casos recientes, a los presos condenados a muerte se les hizo desfilar por las ciudades antes de trasladarlos al lugar de ejecución y proceder a ella por medio de un disparo.

En documentos publicados por separado, Amnistía Internacional expone pormenorizadamente los casos de trabajadores detenidos por su implicación en la creación de un sindicato independiente durante las manifestaciones en favor de la democracia de 1989, y describe otros casos de profesores universitarios e intelectuales detenidos en los últimos meses por su supuesta participación en dichas manifestaciones.

Este documento ofrece información sobre el alcance de la aplicación de la pena capital en China en los últimos meses. Describe aspectos del procedimiento judicial en los casos de pena de muerte y argumenta que este castigo en China, así como en otros países, es discriminatorio y que el procedimiento judicial no puede ofrecer garantías significativas contra los errores de la justicia. Incluye además extractos de artículos de la prensa jurídica china en los que se critican muchos aspectos de la aplicación de la pena capital en este país.

Esta hoja resume un documento de 15 páginas, La República Popular China: 3. La represión continúa: La pena de muerte y las campañas contra la delincuencia (Índice AI: ASA 17/56/90/s), publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 1990. Quien desee más información al respecto o quiera emprender acciones sobre ello debe consultar el documento en su integridad.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, GRAN BRETAÑA

TRADUCCION DE EDITORIAL AMNISTIA INTERNACIONAL, ESPAÑA

EXTERNO (para distribución general)

Indice AI: ASA 17/56/90/s
Distr: SC/CO/GR

Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Reino Unido

Septiembre de 1990

REPUBLICA POPULAR CHINA
LA REPRESION CONTINUA: 3. LA PENA DE MUERTE
Y LAS CAMPAÑAS CONTRA LA DELINCUENCIA

Actualmente, la aplicación de la pena capital en la República Popular China es más frecuente de lo que ha sido durante muchos años. El número de personas condenadas a muerte y ejecutadas en los últimos 12 meses ha alcanzado el nivel más alto desde 1983. En 1990, se castigaban con la pena capital más de 40 delitos, más que en cualquier otra época desde que entró en vigor el Código Penal de 1980. Este código se redactó al finalizar en 1976 la Revolución Cultural, periodo al que ahora se califica oficialmente de periodo "sin ley".

En 1990, como en años anteriores, algunos de los presos condenados a muerte han sido humillados públicamente ante un gran número de personas en actos públicos de imposición de sentencias. Según funcionarios del gobierno y del Partido Comunista, el objeto de estos actos es "asustar a los delincuentes y movilizar a las masas". A algunos de los condenados a muerte se les ha paseado en camiones por toda la ciudad, práctica expresamente prohibida en la legislación china. Los presos cuyas condenas a muerte se anuncian en este tipo de actos públicos son, a menudo, ejecutados inmediatamente de un sólo disparo de pistola o rifle en la nuca o en la espalda. Desde junio de 1989 se han venido impartiendo instrucciones a los fiscales y a los tribunales para que den prioridad a "estabilizar la situación"; las campañas contra la delincuencia y las numerosas condenas a muerte impuestas recientemente están relacionadas con esta política.

Algunas de las condenas a muerte pronunciadas en los últimos meses se han considerado oficialmente como un medio de asegurar "el orden social" y la "estabilidad" antes de los Juegos Asiáticos, que darán comienzo el 22 de septiembre en Pekín. En ocasiones anteriores, Amnistía Internacional ha observado que con frecuencia se anunciaban numerosas condenas a muerte durante los periodos previos a la fiesta nacional china, el 1 de octubre, o a otros festivales o acontecimientos políticos importantes.

Tomando como base informes de los medios de comunicación oficiales, Amnistía Internacional ha registrado más de 720 condenas a muerte impuestas entre enero y mediados de agosto de 1990. Estas condenas incluyen más de 70 penas capitales con un aplazamiento de la ejecución de dos años (en estos casos, cabe la posibilidad de que a los presos que se considere que han mostrado "arrepentimiento" se les conmute la pena por cadena perpetua después de dos años).

No todos los casos de pena capital se publican necesariamente en los medios de comunicación oficiales, y las estadísticas generales sobre este castigo las retiene el gobierno chino; por tanto, es probable que la cifra real sea mucho más elevada.

Sólo en junio y julio de 1990, Amnistía Internacional registró más de 350 penas capitales, impuestas en el contexto de las sucesivas campañas contra la delincuencia iniciadas desde la represión de las protestas en favor de la democracia el año pasado. Estas campañas se iniciaron tras la severa represión del verano y el otoño de 1989 contra personas acusadas de haber participado en actos violentos relacionados con el movimiento prodemocrático de los meses anteriores. Es probable que se ejecutara a algunos presos por delitos de relativa importancia, o por delitos no violentos, sólo porque dio la casualidad de que la celebración de los juicios coincidió con una campaña contra la delincuencia.

Las sucesivas campañas emprendidas contra la delincuencia han tenido lugar en un clima de represión contra los disidentes políticos. En documentos publicados por separado, Amnistía Internacional expone pormenorizadamente los casos de trabajadores detenidos por su implicación en la creación de un sindicato independiente durante las manifestaciones en favor de la democracia del año pasado y describe otros casos de profesores universitarios e intelectuales detenidos en los últimos meses por su supuesta participación en dichas manifestaciones¹. Se siguen produciendo torturas y malos tratos, en especial contra los detenidos en espera de juicio o los que están en un régimen de detención administrativa conocido como "refugio e investigación" (shourong shencha)².

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerar que constituye el exponente máximo de tortura y malos tratos, y una violación del derecho a la vida. La aplicación generalizada de la pena de muerte en China es una cuestión que preocupa a la organización desde hace tiempo; en muchas ocasiones ha solicitado al gobierno chino que ponga fin a las condenas a muerte y a las ejecuciones, y ha publicado numerosos documentos sobre la aplicación de este castigo en China³.

¹Véase People's Republic of China; The Continuing Repression: 1. Imprisoned Trade-Unionists and Workers (República Popular China: La Represión Continúa: 1. Detención de Trabajadores y Sindicalistas), Índice AI: ASA 17/52/90, y People's Republic of China; The Continuing Repression: 2. Imprisoned Writers, Academics and Human Rights Activists (República Popular China: Detención de Escritores, Profesores Universitarios y Activistas de Derechos Humanos), Índice AI: ASA 17/58/90.

²Amnistía Internacional publicó en abril de 1990 declaraciones recientes sobre la continuación de la aplicación de la tortura en China, junto con recomendaciones de la organización sobre las medidas que podrían ayudar a eliminar la tortura en People's Republic of China: Torture and Ill-Treatment (República Popular China: Torturas y malos tratos), Índice AI: ASA 17/18/90.

³Véase, por ejemplo, China: The Death Penalty (China: La pena de muerte) Índice AI: ASA 17/01/89, publicado en enero de 1989, y People's Republic of China: The Death Penalty Debate (República Popular China: El debate sobre la pena de muerte) Índice AI: ASA 17/14/89, publicado por Amnistía Internacional en abril de 1989. Este último documento describe los debates entre especialistas del derecho chinos sobre aspectos controvertidos de la aplicación de la pena de muerte.

El presente documento ofrece información sobre el alcance de la aplicación de la pena de muerte en China en los últimos meses. Describe aspectos del procedimiento judicial en los casos de pena capital y argumenta que la condena a muerte en China, así como en otros países, es discriminatoria y que los procesos judiciales no pueden ofrecer garantías significativas contra los errores de la justicia. Incluye además extractos de artículos de la prensa jurídica china en los que se critican muchos aspectos de la aplicación de la pena capital en este país.

1. EL AUMENTO DE LA APLICACION DE LA PENA DE MUERTE

1.1 Estadísticas oficiales

La pena de muerte se aplica ampliamente en China. En 1983, durante una campaña contra la delincuencia, se tuvo conocimiento de unas 600 condenas a muerte entre agosto y octubre, según la información procedente de unas 20 ciudades y comarcas importantes; sin duda, la cifra real era mucho más alta. Amnistía Internacional calculó que habían sido ejecutadas entre 5.000 y 10.000 personas a consecuencia de la campaña de 1983. En cada uno de los años sucesivos hasta 1988, se denunciaron entre 150 y 200 ejecuciones. Durante esos años se llevaron a cabo campañas contra diversas formas de delincuencia, aunque ninguna de tal importancia como la de 1983.

En 1989, el número de condenas a muerte registradas por Amnistía Internacional ascendió a más de 370. Según los informes, en 1990, de las más de 650 condenas a muerte sin aplazamiento de la ejecución registradas entre enero y mediados de agosto, más de 350 fueron impuestas en junio y julio solamente. Al parecer, de éstas, más de 270 se han llevado a cabo.

El gobierno chino no publica estadísticas generales sobre el uso de la pena de muerte. En las estadísticas que están a disposición del público, las condenas a muerte se enumeran junto con las de prisión. Cuando los medios de comunicación oficiales chinos dan cifras sobre la pena capital, por lo general se refieren únicamente a un área específica y a un periodo corto, a menudo un periodo de "lucha" intensificada contra una forma particular de presunta delincuencia.

Por ejemplo, el 16 de abril de 1990, el periódico de Hong Kong Wen Wei Po publicó declaraciones de fuentes oficiales chinas que afirmaban que en 1989 se habían celebrado en la provincia meridional de Yunnan 2.311 juicios por delitos de drogas, que dieron lugar a 136 condenas a muerte (incluidas 67 con un aplazamiento de la ejecución de dos años). El 13 de enero de 1990, la radio municipal de Shanghai comunicó que en 1989 se había condenado a muerte en esta ciudad a 13 personas por el delito de "juego". El informe no especificaba si en alguna de esas condenas se aplazaba la ejecución durante dos años. El 22 de junio de 1990, el Fazhi Ribao (el principal periódico jurídico de China) publicó que en 1989, los tribunales de la provincia de Hebei, colindante con Pekín, habían impuesto un "24,8 por ciento más" de condenas a muerte (incluidas condenas con un aplazamiento de dos años) que en 1988. El informe no especificaba las cifras.

Se dispone de pocos datos oficiales sobre la situación de 1990. El artículo del Fazhi Ribao del 22 de junio de 1990 sobre la provincia de Hebei decía que en dicha provincia se habían impuesto "varias" condenas a muerte desde el inicio de una campaña nacional de "represión firme" (yanda) de los delitos graves en

mayo de 1990. Ren Jianxin, presidente del Tribunal Supremo del Pueblo, fue citado en la revista Liaowang el 9 de julio de 1990 diciendo que, desde enero a abril de 1990, se habían pronunciado 126.900 sentencias en primera instancia sobre casos penales, de los que un 23,74 por ciento se refería a "quebrantamientos graves del orden social". En Heze, comarca de mediana extensión de la provincia costera de Shandong, se produjeron "27 condenas a muerte y ejecuciones" entre enero y abril de 1990, según el servicio radiofónico de la provincia. En la provincia central de Guizhou, según un informe de la radio provincial del 7 de julio de 1990, se practicaron 15.000 detenciones entre el 25 de mayo y el 25 de junio, durante las primeras semanas de la campaña de "represión firme", y se convocaron 100 actos públicos. Amnistía Internacional no dispone de datos sobre las condenas a muerte en esa provincia durante ese periodo.

Parece que hay variaciones regionales considerables en la aplicación de la pena de muerte en China. No está claro si las variaciones registradas reflejan discrepancias en el uso de la pena capital o en la información que se da sobre las condenas a muerte. Algunas de esas variaciones podrían reflejar ciertas diferencias en la política de aplicación de las sentencias. La tabla que se ofrece a continuación indica el número de condenas a muerte (incluidas las que han sido aplazadas por dos años) registradas por Amnistía Internacional entre enero y finales de julio de 1990 en zonas donde la proporción entre las condenas y la población parece especialmente alta.

Area	Población (1986)	Condenas a muerte (enero-julio 1990)
Municip. Pekín	10,0 millones	28
Municip. Tianjin	8,2 "	17
Municip. Shanghai	12,4 "	68
Prov. Guangdong	63,5 "	98
Prov. Liaoning	37,3 "	72+
Prov. Shaanxi	30,5 "	33
Reg. Aut. Tíbet	2,5 "	7

1.2 El amplio conjunto de delitos punibles con la pena capital

La legislación penal china estipula la pena de muerte para un amplio número de delitos, incluidos delitos que no implican necesariamente el uso de la violencia. Según los especialistas jurídicos chinos⁴, en 1989 había 38 delitos punibles con la muerte en el código penal. La Normativa provisional sobre el castigo del personal militar que infringe sus funciones define otros 10 delitos castigados con la pena capital, pero que normalmente no se aplican a civiles.

Mientras que las Naciones Unidas han respaldado el objetivo de la abolición mundial de la pena de muerte, y han recomendado a sus Estados miembros que eviten la extensión de su aplicación, China ha aumentado el número de delitos castigados con la pena de muerte en varias ocasiones durante la última década. Amnistía Internacional publicó información detallada sobre estos cambios jurídicos sucesivos en un documento publicado en enero de 1989 sobre la pena de muerte

⁴Véase CUI Qingsen, LIAO Zengyun, "Xianzhi Sixing yu Shenyong Sixing" (Limitación y precaución en la aplicación de la pena de muerte), en Faxue Yanjiu, N°2, 1989.

en China (véase la nota 3). En julio de 1990, una nueva normativa definió por primera vez como delito castigado con la pena de muerte la elaboración, distribución, contrabando o venta de "productos obscenos" en cantidad.

A consecuencia de ello, actualmente puede aplicarse la pena de muerte a civiles en más de 40 delitos, entre los que figuran decenas de infracciones que no implican necesariamente el uso de la violencia, como el contrabando, el robo, el desfalco y el tráfico de drogas. Un artículo publicado en una revista jurídica en 1989, antes de que entrara en vigor la ley sobre "productos obscenos", señalaba que "si China no es el país con el mayor número de delitos punibles con la pena capital del mundo, bien puede ser uno de ellos"⁵.

La prensa china ha informado en algunos casos de ejecuciones por robo y comercio ilegal. Por ejemplo, se recibieron informes de dos campesinos de la provincia de Sichuan que fueron ejecutados en abril por vender pieles de panda. En Pekín, Li Guangming, de 27 años, fue ejecutado el 28 de abril por "robo y gamberrismo". Hou Changwei, de 25 años, fue ejecutado el 28 de junio en Dalian, provincia de Liaoning, por robo; anteriormente había cumplido una pena no especificada de cárcel por "gamberrismo". Fu Chaolin, campesino, fue condenado a muerte en el condado de Leshan, provincia de Sichuan, al parecer, por robar bicicletas y un uniforme de policía.⁶ Amnistía Internacional ha recibido informes de más de 30 personas que han sido condenadas a muerte este año por delitos de tráfico de drogas.

2. HUMILLACION PUBLICA DE LOS PRESOS CONDENADOS A MUERTE

2.1 Actos públicos de imposición de sentencias

El 22 de junio de 1990 en Jinzhou, ciudad importante de la provincia septentrional de Liaoning, se anunciaron las condenas a muerte de 12 personas acusadas de robo, "sabotaje" a una central eléctrica y homicidio, en un acto público al que, según la radio provincial, asistieron casi 20.000 personas. Cuatro días después, la radio comunicó que se había celebrado otro acto público en Shenyang, capital de la provincia, al que asistieron 10.000 personas. Al parecer, los asistentes "respondieron con un cálido aplauso" cuando se impuso la pena capital a un presunto "bandido" y a cuatro presuntos "ladrones". Según la agencia de prensa oficial Xinhua, 40.000 personas asistieron el 26 de junio en Kunming, capital de la provincia sureña de Yunnan, a un acto similar, que se centró en el tráfico de drogas; se quemaron grandes cantidades de narcóticos y se anunciaron las condenas a muerte de 14 supuestos traficantes de droga.

A veces, los actos públicos de imposición de sentencias se celebran dentro de las instituciones penitenciarias. El 17 de mayo de 1990, según el servicio de televisión de Lhasa, en la Región Autónoma del Tíbet, se celebró uno de estos actos en el interior de la prisión de dicha localidad, y se condenó a muerte a tres internos acusados de haber planeado una fuga. A los reclusos Migmar Tashi

⁵Véase BI Ruiling, "Reflexiones sobre las mejoras en el ámbito de aplicación de la pena de muerte en el Código Penal chino" (en chino), Zhongguo Faxue, N°4, 1989.

⁶Estos informes se ofrecieron respectivamente en: Beijing Ribao, 29 de abril de 1990; radio provincial de Liaoning, 28 de junio de 1990; y Agence France Press, 12 de agosto de 1990.

y Dawa se les impuso pena de muerte sin aplazamiento de la ejecución, mientras que a Dundhup Tsering se le impuso la misma pena pero con un aplazamiento de la ejecución durante dos años. Se han recibido informes sin confirmar de que estas tres personas eran presos políticos.

Los actos públicos de imposición de sentencias no forman parte del procedimiento judicial normal. El 12 de julio de 1983, el Tribunal Supremo del Pueblo emitió la "Opinión sobre la cuestión de la detención pública", en la que dejaba claro que no debían celebrarse actos públicos para detener formalmente a sospechosos. Añadía:

"En algunos lugares donde los elementos criminales son especialmente desenfrenados, pueden seleccionarse casos penales típicos y graves, y puede convocarse un acto y anunciarse públicamente la sentencia para intimidar a los delincuentes, promover la honestidad, propagar el sistema jurídico y educar a las masas."

Aunque la Opinión no alude específicamente a la pena capital, tiende a confirmar que las condenas a muerte anunciadas en actos públicos representan sólo una fracción de todos los casos de pena capital. Tales actos tienen el mero objeto de hacer públicas las acusaciones contra el reo, así como la sentencia. No constituyen un juicio y el acusado no tiene la oportunidad práctica de presentar una defensa. Amnistía Internacional cree que estos actos constituyen una forma de trato degradante prohibido como tal por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que China es Estado parte desde 1988.

2.2 El paseo de los presos antes de las ejecuciones

En algunos casos recientes, a los presos condenados a muerte se les ha paseado por la ciudad antes de ser llevados al lugar de ejecución y proceder a la misma. El 27 de julio de 1990, el Renmin Gonggan Bao (una publicación del Ministerio de Seguridad Pública) hizo referencia a la práctica de pasear a los presos condenados a muerte o a penas de prisión, y destacó que se había prohibido "hacía mucho tiempo". El artículo decía en parte:

"Desde que empezó la lucha 'para reprimir firmemente la delincuencia', todos los órganos de la Seguridad Pública han cumplido estrictamente las disposiciones e instrucciones del Grupo Dirigente en Ciencias Políticas y Derecho, han tramitado los casos en estricta conformidad con la ley, se han ocupado de una serie de delincuentes peligrosos y los han controlado, y han conseguido victorias notables. Sin embargo, se siguen planteando algunas cuestiones sobre la aplicación de la ley.

En algunos lugares, se siguen produciendo negligencias a la hora de cumplir la ley o hacerla cumplir estrictamente. Por ejemplo . . . para aumentar la tensión antes de ocuparse abiertamente de los delincuentes, en algunos lugares se sigue adoptando el método de colgarles carteles y hacerles desfilar por las calles, e incluso algunas emisoras de televisión retransmiten estos desfiles. Esto quedó expresamente prohibido hace tiempo. Dichos métodos contravienen los principios del sistema jurídico.

La razón principal de las cuestiones antes citadas es que algunos camaradas tienen un concepto débil del sistema jurídico y un entendimiento erróneo

de la aplicación estricta de la ley..."⁷

Aunque el artículo se refiere a la prohibición, en vigor desde hace tiempo, de todas las formas de desfiles de presos, una circular oficial del gobierno por la que se proscriben los paseos, hace referencia únicamente a los presos condenados a muerte. La Circular del Tribunal Supremo del Pueblo [y de otras autoridades] sobre la prohibición estricta de pasear a los presos por las calles antes de ser ejecutados, publicada el 24 de julio de 1986 afirma en parte:

"En algunos lugares se utiliza todavía el método de escribir pancartas y pasear a los presos condenados a muerte por las calles, ante las masas, antes de llevarlos al lugar de la ejecución para proceder a la misma. Este método no está en consonancia con las exigencias de una civilización socialista, y su influencia en la sociedad tampoco es buena; por tanto, debe ser firmemente reprimido.

El Código de Enjuiciamiento Criminal, artículo 155, párrafo 3, dispone: 'La ejecución de las condenas a muerte debe anunciarse públicamente pero no debe efectuarse en público'. La Circular sobre medidas estrictas para evitar que las publicaciones reaccionarias difundan rumores y calumnias aprovechándose del sistema chino de castigo a los delincuentes, del 21 de noviembre de 1984 dispone asimismo: 'Los lugares de ejecución no deben instalarse en zonas concurridas o próximas a las calles principales o a zonas turísticas.'

... A partir de ahora, la ejecución de los presos condenados a muerte se efectuará en rigurosa consonancia con el Código de Enjuiciamiento Criminal y otras normas pertinentes; se prohíbe estrictamente pasear a los presos condenados a muerte ante las masas; las ciudades abiertas deben poner especial cuidado para evitar influencias perjudiciales en sus relaciones exteriores."

A pesar de estas prohibiciones, se han recibido informes de que en Xian, capital de la provincia de Shaanxi, en China central, a 28 personas condenadas a muerte por homicidio, tráfico de drogas y otros delitos graves, las pasearon por la ciudad el 28 de julio de 1990, antes de llevarlas al lugar de ejecución y disparar sobre ellas. El 9 de agosto de 1989, en Cantón (Guangzhou), 18 presos, cuyas condenas a muerte se habían anunciado en un acto público, fueron transportados en un camión al lugar de ejecución. En la parte exterior del camión se colocó una pancarta con el nombre de uno de los presos, Liang Mingyuan, condenado a muerte por haber perpetrado un robo a mano armada con cuatro cómplices; a uno de ellos también se le condenó a muerte, mientras que a otro se le impuso la misma condena, pero con un aplazamiento de la ejecución por dos años.

Personas que han presenciado los actos públicos de imposición de sentencias y los paseos de los condenados, han informado que a los reos se les hacía adoptar posturas humildes y se les instaba, o se les obligaba, a permanecer pasivos. No iban acompañados de un abogado, ni siquiera del abogado que les había defendido en el juicio. Amnistía Internacional publicó fragmentos de los relatos de los testigos de estos procedimientos en su documento de enero de 1989 citado anteriormente.

⁷Traducido al inglés por la British Broadcasting Corporation, Summary of World Broadcasts (Resumen de Retransmisiones Mundiales), 24 de agosto de 1990.

Amnistía Internacional cree que los actos públicos de imposición de sentencias y el paseo de los presos antes de las ejecuciones constituyen una forma de trato degradante. El hecho de que sea imposible que los presos presenten una defensa u obtengan una revisión o conmutación de la sentencia durante estos procedimientos demuestra que son de naturaleza política y que no forman parte del procedimiento judicial. El carácter no jurídico de los actos públicos de imposición de sentencias se confirma en un fragmento de la circular del Tribunal Supremo antes citada. La humillación, y el dolor físico y psíquico ocasionados por estos procedimientos son innecesarios y no inherentes a la aplicación de ningún castigo legítimo. Constituyen, por tanto, formas de trato prohibidas por la Convención contra la Tortura.

3. EL EFECTO POLITICO Y SOCIAL DE LA PENA DE MUERTE

3.1 La aplicación de la pena de muerte en relación con la agitación política

Amnistía Internacional ha registrado los nombres de más de 50 personas condenadas a muerte en los últimos 14 meses por delitos supuestamente relacionados con las protestas que tuvieron lugar durante la represión de las manifestaciones en favor de la democracia el verano de 1989.⁸ Ninguna de estas personas eran estudiantes o intelectuales; todas eran obreros, campesinos o desempleados. Entre ellas figuraban Sun Baohe, obrero de una fábrica de Jinan, provincia de Shandong, ejecutado el 14 de octubre de 1989 por volcar e incendiar un auto el 6 de junio de 1989, y 26 personas cuyos nombres se desconocen, condenadas a muerte en la misma ciudad el 17 de junio de 1989 (9 de ellas con un aplazamiento de la condena por dos años) acusados de "poner en grave peligro la seguridad pública". A Li Lianting, campesino de la provincia de Shandong, se le condenó a muerte el 4 de agosto de 1989 por supuestas "actividades contrarrevolucionarias", que podrían no estar relacionadas con las manifestaciones prodemocráticas. La radio provincial de Shandong afirmó el día de su condena que el reo era el "dirigente" de una organización religiosa.

Entre otras muchas personas condenadas a muerte el año pasado en relación con los sucesos políticos se encontraban Wang Guiyuan y Zhou Xiangcheng. Las condenas a muerte contra estos dos hombres se anunciaron en un acto público en Chengdu el 1 de julio de 1989. Al parecer, habían incendiado vehículos durante los disturbios ocurridos en la ciudad el 5 de junio. Estos disturbios estaban relacionados con la muerte de manifestantes el 3 y 4 de junio en Pekín. El 9 de julio, el periódico Sichuan Ribao anunció que estos dos hombres habían sido ejecutados después de un acto público convocado el 8 de julio, en el que el Tribunal Superior del Pueblo de la provincia anunció que desestimaba la apelación.

Fuentes privadas han informado también que se llevaron a cabo ejecuciones secretas en Pekín después de la matanza del 4 de junio de 1989 en la capital. Según algunas fuentes, varios cientos de personas detenidas en relación con las protestas fueron ejecutadas en secreto en Pekín entre junio y agosto de 1989.

3.2 La pena de muerte: un castigo discriminatorio

⁸Véase People's Republic of China: Death Sentences and Executions (República Popular China: Penas de muerte y ejecuciones), Índice AI: ASA 17/21/90, publicado en mayo de 1990.

Amnistía Internacional no conoce que se haya realizado ningún estudio sistemático sobre el efecto social de la pena capital en China. Las pruebas circunstanciales de las condenas a muerte que se anuncian en los medios de comunicación sugieren que este castigo afecta casi exclusivamente a campesinos, obreros y desempleados.

A veces se ha condenado a muerte a oficinistas y miembros relativamente importantes del Partido Comunista por presunto desfalco de importantes sumas de dinero, pero se han dictado sentencias de muerte contra campesinos, obreros y desempleados por robo de cantidades insignificantes de dinero u objetos sin importancia como cable eléctrico y otros bienes y materiales. Por ejemplo, en un juicio celebrado en Lhasa, Región Autónoma del Tíbet, el 14 de julio de 1990, se condenó a muerte a dos hombres, acusados, al parecer, de dirigir un grupo de ladrones. Según los informes, se acusó a la "banda de ladrones" dirigida por estos dos hombres, Huang Changyong y Liao Weideng, de robar bienes por un valor total de menos de 76.000 yuan (unos 16.100 dólares estadounidenses). Un tercer hombre, Xu Lie, acusado de dirigir una banda que robó unos 21.000 yuan, fue condenado a muerte con un aplazamiento de la ejecución de dos años.

Amnistía Internacional cree que la pena de muerte en China es un castigo discriminatorio que tiende a afectar desproporcionadamente a personas de clase social baja que no tienen la categoría política de miembros del partido gobernante o de organizaciones afiliadas ni el prestigio del que gozan los miembros de determinadas profesiones.

4. LA POCA FIABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE LOS CASOS DE PENA DE MUERTE

La incidencia de la pena de muerte en China es aún más grave si se tiene en cuenta que las consideraciones políticas a menudo interfieren en la actividad de los tribunales, impidiendo que se tomen en consideración todos los detalles de cada caso individual. Además, a los tribunales se les deja poca libertad para decidir la pena, una vez que se han formulado los cargos contra el acusado.

Dirigentes políticos y altos cargos de la judicatura han instado oficialmente a los tribunales a colaborar para mejorar la "estabilidad" de China tras los disturbios de 1989 antes de que se celebren los Juegos Asiáticos en Pekín. De igual modo, algunos funcionarios han descrito en el pasado la "rapidez" con que se resuelven las sentencias como un medio de "disuadir" a los delincuentes; el 2 de agosto de 1990, en una entrevista con la agencia de noticias oficial Zhongguo Xinnen Shi, Li Tianxiang, fiscal jefe de la provincia insular de Hainan, describió un caso en el que se condenó a muerte a un presunto delincuente a los 10 días del homicidio de un funcionario del Departamento de Seguridad Pública. Li Tianxiang dijo que la rápida resolución del caso tuvo "un enorme poder disuasorio".

Otra razón dada en los medios de comunicación chinos para justificar las campañas contra la delincuencia que originan un aumento de la aplicación de la pena de muerte es que la situación del orden público en China es "horrible" y que hay que disuadir a los elementos criminales. Sin embargo, según los datos de que dispone Amnistía Internacional, China no ha publicado ningún estudio general sobre la delincuencia en los últimos años. Las sucesivas campañas contra la delincuencia que se han llevado a cabo desde 1983 no parecen haber contribuido a reducir la criminalidad en modo alguno. El número de casos penales llevado ante los tribunales ha aumentado de forma constante todos los años desde 1984, según las estadísticas oficiales disponibles. En realidad, como mantiene un

artículo de la revista jurídica bimensual Faxue que se ofrece más adelante, la aplicación de la normativa de emergencia para juzgar a los acusados rápidamente puede dar lugar a que éstos desistan de utilizar las medidas de revisión de casos dispuestas por la ley.

4.1 Las Comisiones de Resolución

El propio procedimiento judicial hace que sea muy improbable que se revoquen las condenas a muerte, una vez resueltas. La práctica conocida como "sentencia primero, juicio después" (xian pan hou shen) es significativa a este respecto. Dicha práctica consiste en hacer que las comisiones de resolución, establecidas en cada tribunal para supervisar el trabajo judicial, examinen los casos y tomen una decisión antes de la celebración del juicio formal. Las comisiones de resolución están formadas por funcionarios judiciales y miembros del Partido. Aunque la transferencia de casos a estas comisiones no es obligatoria según la legislación china, su práctica es general. Una revista jurídica china señaló en 1987:

"Este proceso interno de examen y aprobación [de los fallos] debe llevarse a cabo, y debe adoptarse una decisión antes de que comience la vista oral. Esto conduce inevitablemente, tanto en aspectos de fondo como de forma, al fenómeno de 'sentencia primero, juicio después'.

Esta práctica hace que la vista oral degenera en una mera formalidad ... e inevitablemente dé lugar a casos erróneos e injustos ... Para ser más exactos, la práctica de 'decidir la sentencia antes del juicio' equivale simplemente a una versión remodelada de la presunción de culpabilidad."⁹

La legislación china no dispone la presunción de inocencia a la que se alude en el artículo citado; importantes juristas chinos han afirmado que el Derecho chino "no presume ni la inocencia ni la culpabilidad". La práctica de "sentencia primero, juicio después" parece que continúa, al igual que la práctica de entregar las sentencias para su examen y aprobación a las comisiones del Partido encargadas del trabajo "político y jurídico".

4.2 Críticas de expertos jurídicos chinos a las Medidas de Emergencia de 1983

Las condenas a muerte se imponen según el Código Penal de 1979, reformado en 1983 con motivo de la campaña contra la delincuencia de aquel año. Mientras que el Código Penal afirma que la pena capital sólo puede aplicarse a "los elementos criminales que cometan los delitos más atroces", las reformas de 1983 han duplicado prácticamente el número de delitos punibles con la muerte, hasta incluir delitos contra la propiedad y otros que no implican necesariamente el uso de la violencia. Con estas reformas se introdujeron procedimientos de emergencia que reducen considerablemente la oportunidad de los acusados de presentar una defensa y que, por lo general, disminuyen la probabilidad de que el acusado sea juzgado con las debidas garantías.

Una de las reformas de 1983, una "Decisión" que trata sobre la "resolución rápida de casos que afectan a elementos criminales que ponen en grave peligro la seguridad pública", dice en parte lo siguiente:

⁹Véase Faxue, 1987.

"1. Con respecto a los elementos criminales a quienes se deben imponer condenas a muerte por homicidio, violación, robo ... y otros graves atentados contra la seguridad pública, si los principales hechos delictivos están claros, las pruebas son irrefutables y la indignación popular es muy grande, el caso debe ser resuelto con rapidez y sin demoras, y [los tribunales populares] no quedarán obligados por las restricciones estipuladas en el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Criminal, referente a los plazos para entregar al acusado una copia de la acusación y para expedir las diversas citaciones y avisos.¹⁰

2. El plazo de que disponen los elementos criminales enunciados en el párrafo anterior para la apelación, y el plazo de que disponen los fiscales populares para las protestas, se modifica y pasa de los 10 días estipulados en el artículo 131 del Código de Enjuiciamiento Criminal, a 3 días."

Esta Decisión ha sido objeto de fuertes críticas entre los especialistas jurídicos chinos en los últimos años. En octubre de 1989, la revista jurídica bimensual Faxue publicó un "debate" crítico sobre la decisión, en el que señalaba que ésta compromete la defensa correcta y estimula la práctica de "sentencia primero, juicio después". El artículo, de Xie Xipeng, afirma:

"[La Decisión sirvió a un propósito útil en 1983.] Sin embargo, tras los cambios en la situación objetiva, han surgido algunos problemas en la aplicación judicial de esta decisión, hasta el punto de afectar incluso de algún modo la calidad de las vistas orales en los casos de pena de muerte. Me gustaría hacer las siguientes observaciones:

(a) La Decisión no está de acuerdo con la política de severidad y precaución del Partido y del gobierno en cuanto a la aplicación de la pena capital.

El Código de Enjuiciamiento Criminal de China estipula que los Tribunales del Pueblo deben entregar una copia de la acusación al reo en un plazo de no menos de siete días antes del inicio del juicio. El objeto de ello es conceder al acusado el tiempo suficiente para preparar la defensa y garantizar así sus derechos. Las disposiciones sobre el plazo de apelación son éstas: para apelar contra la condena a muerte deben concederse 10 días y para apelar contra la sentencia, 5 días. La razón principal de que esto sea así es otorgar al acusado el tiempo suficiente para considerar el uso de la apelación, preparar el recurso y garantizar así su derecho a ella. La Decisión dio lugar a algunas alteraciones en estas disposiciones y, en especial, redujo considerablemente el tiempo permitido para la apelación o para la preparación de la defensa, y de ahí que los derechos del acusado en estos dos aspectos quedaran limitados en grados diversos. No obstante, estos dos derechos son los principales derechos procesales que la ley permite al acusado. Si los derechos procesales de que disfruta un acusado condenado a muerte no son equivalentes a los que disfruta un acusado en otros casos, se incumple claramente la política de prudencia y rigurosidad que han adoptado el Partido y el Estado con respecto a la pena de muerte, y ello es contrario a garantizar la calidad de los casos de pena capital.

¹⁰El artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que la acusación debe entregarse normalmente al acusado no más tarde de siete días antes del juicio.

(b) La Decisión contribuye a la tendencia insana a los juicios de 'sentencia primero, juicio después'.

Una de las condiciones previstas en la Decisión es que puede aplicarse a 'los delincuentes que deben ser condenados a muerte'. Esto significa que antes del juicio, además de determinar los hechos del caso y realizar las investigaciones necesarias, el Tribunal del Pueblo ha de decidir si el acusado 'debe ser condenado a muerte', y sólo entonces puede decidir si procede aplicar la Decisión. En realidad, esto significa 'sentencia primero, juicio después'. El hecho de resolverse las condenas a muerte de antemano, supone una limitación importante a la libertad de acción de los que dirigen el juicio, hace que les sea difícil conceder el peso debido a la defensa y que los derechos del acusado carezcan de fuerza real. En tales circunstancias, es fácil que se cometan injusticias y errores.

(c) En los juicios en los que se aplica la Decisión, en determinadas circunstancias, habría, en definitiva, una infracción de la ley.

Si después de la investigación de un caso el Tribunal del Pueblo considera que sería procedente aplicar la Decisión, el juicio puede dar comienzo en menos de siete días a partir de la entrega al acusado de una copia de la acusación, o en el plazo de menos de tres días desde la expedición de cada citación y aviso. Si durante la vista oral del caso surgen circunstancias nuevas que indican que no debería condenarse a muerte al acusado, existe, evidentemente, una infracción de la ley, ya sea en su esencia o en su aplicación, ambos supuestos vienen a resultar igual. Si el tribunal sigue adelante y condena a muerte al acusado, esto representa un claro quebrantamiento de lo estipulado en el código penal para la aplicación de la pena capital. Si por el contrario, el tribunal considera los hechos y se adhiere a los principios, y decide no condenar a muerte al reo, entonces supone una infracción del artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que estipula los plazos para la presentación de la acusación, las citaciones y los avisos.

(d) Las disposiciones de la Decisión respecto a las condiciones en las que ésta debe aplicarse son bastante difíciles de comprender.

El Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que sólo debe aplicarse la pena de muerte para los delitos más atroces, y no incluye 'la gran indignación popular' entre las condiciones para su aplicación... Sin embargo, la Decisión dispone que 'la gran indignación popular' es una de las condiciones para su propia aplicación, y esto significa que cuando un tribunal decide si debe condenar a alguien a muerte, debe decidir también si la indignación popular es grande antes de considerar si aplicar o no la Decisión. Esto conduce a dos problemas: en primer lugar, las personas tienen sentimientos distintos y reaccionarán de forma distinta ante casos distintos, de modo que es difícil medir la indignación popular en un caso concreto; en segundo lugar, suponiendo que pudiera medirse la indignación de la gente, en casos en los que se cumplieran todas las demás condiciones pero la indignación popular no fuera muy grande, sería entonces procedente aplicar la Decisión? -- sobre este punto, la ley no se expresa con claridad.

(e) En la práctica judicial, la Decisión ha dado lugar a algunos efectos negativos.

Algunos acusados que están familiarizados con la ley, desesperan al ver que el tribunal aplica la Decisión en su caso, y se consideran prácticamente muertos. Puede que durante el proceso no digan nada en absoluto, o puede que griten o lloren, o que incluso intenten escapar. Todo esto entorpece al Tribunal del Pueblo en el examen concienzudo de los hechos del caso que está viendo, e impide que se den en el juicio las normas establecidas. Por otra parte, algunos miembros de la judicatura intentan separar los casos de acusados que deberían ser procesados y juzgados conjuntamente para poder utilizar el juicio expedito estipulado en la Decisión, y así obtener la pena de muerte para el cabecilla y juzgar a los otros por separado. Es fácil que este método dé lugar a ejecuciones indebidas y entorpezca la correcta tramitación de los casos de varios reos con un delito en común.

Con todo, la Decisión se estableció y se aplicó en un momento de inestabilidad y de desorden social. Considerando que ahora la situación ha dado un giro positivo, y que ya se ha producido un cambio en las condiciones legislativas especiales que prevalecían entonces, la Decisión no garantiza en muchos aspectos la calidad de los juicios en los casos de pena de muerte, ni supone ninguna mejora en el sistema jurídico socialista. Por tanto, me gustaría sugerir a los órganos legislativos que, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley, anuncien el cese de su uso, o que al menos la modifiquen o la mejoren."

4.3 Restricciones a los abogados

La actuación de los abogados en el proceso judicial chino está muy retringida. En 1987, sólo un 20 por ciento de todos los casos penales contaron con la presencia de un abogado; no se sabe con certeza cuántos de estos casos eran de pena de muerte. Aquel año sólo había unos 20.000 abogados, de los cuales un tercio trabajaba con jornada completa.¹¹ En los casos de pena de muerte, las restricciones a los abogados vienen dadas por los plazos estrictos estipulados en las reformas del Código Penal de 1983; en la práctica, sólo disponen de un día o dos para estudiar los pormenores del caso y para conocer al acusado.

El 27 de abril de 1981, el Tribunal Supremo del Pueblo y otras autoridades del gobierno central publicaron una circular firmada conjuntamente sobre "las normas concretas" para la participación de abogados en litigios. En ellas se dispone que un abogado que actúe en favor de un acusado puede consultar los archivos pertinentes al caso, pero "no puede consultar los archivos de la comisión de resolución ni los del tribunal colegiado, ni tampoco el material esencial (xiansuo cailiao) sobre otros casos". La circular conjunta también establecía que un abogado sólo puede visitar a un acusado en el lugar donde está detenido si presenta, entre otros documentos, una carta de presentación "del formato debido" escrita a propósito de tal visita. Un conjunto de "normas suplementarias" sobre la participación de abogados en litigios, publicada el 26 de junio de 1986, dispone que "las pruebas escritas" y "los alegatos de defensa" entregados oficialmente al tribunal por el abogado, se pueden adjuntar, "si el tribunal lo estima necesario", al expediente del caso.

Otra de estas normas establece que no se ordenará "arbitrariamente a los

¹¹Véase Renmin Ribao, 26 de julio de 1987; Zhongguo Fazhi Bao, 1 de junio de 1988.

abogados abandonar la sala"; es posible que esta disposición refleje la preocupación por el trato informal que se da a los abogados en los tribunales. El 8 de julio de 1988, el Guangming Ribao, uno de los principales periódicos nacionales, informó que "a numerosos abogados defensores en casos penales se les ha degradado, se les ha expulsado del Partido, se les ha obligado a abandonar la sala, esposados incluso, y se les ha atado y apaleado".

Oficialmente se considera a los abogados "trabajadores jurídicos del Estado"¹², y de hecho a veces son contratados por las autoridades gubernamentales locales; su falta de independencia, considera Amnistía Internacional, es un factor que contribuye a la falta de garantías procesales en China.

5. CRITICAS DE LA PRENSA JURIDICA CHINA A OTROS ASPECTOS DE LA PENA DE MUERTE

5.1 Críticas a las directrices para la imposición de condenas a muerte

Las autoridades centrales chinas entregan habitualmente a los tribunales locales directrices sobre diversos asuntos. Normalmente, estas directrices se emiten conjuntamente con instituciones centrales como el Tribunal Supremo del Pueblo, la Fiscalía Suprema del Pueblo y otros ministerios. No se hacen públicas de forma sistemática y pueden ser revocadas o anuladas por otras normas. Algunas de estas directrices se refieren a la pena de muerte.

Un artículo titulado "Es desaconsejable condenar a muerte a todos los delincuentes que hayan robado bienes por valor de más de 30.000 yuan", publicado en la revista jurídica Faxue Pinglun, en enero de 1989, exponía un argumento en contra de esa directriz. Emitida en fecha sin especificar, la directriz trata sobre "varias cuestiones acerca de la aplicación concreta de la ley" en los casos de robo, y estipula que "debe condenarse a muerte conforme a derecho a los individuos que roben propiedades públicas o privadas por valor de más de 30.000 yuan (unos 7.000 dólares estadounidenses)".

El artículo señala que "conforme a ella [la directriz], todos los órganos judiciales han dictado penas de muerte" contra personas acusadas de robar más de 30.000 yuan; "y hay lugares donde las condenas a muerte se han llevado a cabo inmediatamente, sin excepción". Los autores del artículo mantienen que la directriz "va en contra" de la "teoría" y del "espíritu" de la legislación penal, y critican la ejecución inmediata de las condenas a muerte en estos casos. De hecho, según el Código Penal, la pena capital no es un castigo preceptivo, mientras que parece que la directriz antes citada la convierte en pena única para el robo de bienes por valor de más de 30.000 yuan.

Los autores del artículo recomiendan que, en lugar de esta directriz, "se utilicen medios legislativos", como las normas para "el castigo de delitos de corrupción y soborno", que no estipulan la pena de muerte obligatoria.

5.2 Críticas al amplio uso de la pena de muerte

Un artículo publicado en una revista jurídica universitaria en 1989 (véase la nota 4) criticaba fuertemente la frecuencia con que se aplicaba la pena de muerte en China. Argumentaba que dicha práctica "estaba en claro desacuerdo con

¹²Véase "Normativa provisional de la República Popular China sobre los abogados", que entró en vigor el 1 de enero de 1982, artículo 1.

la tendencia general [en el mundo] de comenzar a limitar las condenas a muerte y reducir [el número de] las ejecuciones".

Los autores hacían "recomendaciones concretas" de no aplicar la pena capital en delitos como "lucro y especulación", "obligar a las mujeres a la prostitución", o "informar a otras personas de métodos delictivos". Su argumento era que algunos de estos delitos son "actos en los que el límite entre la culpa y la inocencia varía" y que la pena de muerte no es un "remedio eficaz". Asimismo instaban a que se hiciera un "uso pleno" del aplazamiento de dos años de la ejecución en los casos de pena capital.

6. OPINIONES Y PREOCUPACIONES DE AMNISTIA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerar que constituye una forma máxima de castigo cruel, inhumano y degradante y que viola el derecho a la vida. Las autoridades chinas opinan que la pena de muerte es un método disuasorio eficaz para determinados tipos de delito y afirman que, en algunos casos, sólo la pena capital puede "apaciguar la ira de la gente". Sin embargo, según la información de que dispone Amnistía Internacional, ningún estudio ha determinado jamás que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial en comparación con otras formas de castigo.

A Amnistía Internacional le preocupa que las sucesivas campañas contra la delincuencia, como la campaña de "represión firme" que comenzó en mayo de 1990, originen un gran número de condenas a muerte y ejecuciones por delitos que en otras épocas se habrían penado con más indulgencia. La organización cree que las campañas sucesivas, en vez de "educar" a los ciudadanos y "disuadir" del delito, pueden dar lugar a que el proceso judicial se perciba como arbitrario.

Las Naciones Unidas han respaldado el objetivo de la abolición mundial de la pena de muerte. Para avanzar hacia él, es fundamental que las salvaguardias y las restricciones acordadas internacionalmente se respeten en todos los países que todavía no han abolido la pena capital. Amnistía Internacional considera que China no observa algunas de estas salvaguardias y restricciones, y por ello continuará solicitando al gobierno que adopte las medidas siguientes en consonancia con las normas internacionales:

- asegurar que se pongan a disposición de todos los presos acusados de un delito punible con la muerte todos los medios necesarios, incluida la libre elección de un abogado, para asegurar la celebración de un juicio con las debidas garantías ante un tribunal independiente, competente e imparcial, y la protección de sus derechos en todas las fases del proceso judicial;
- asegurar que toda persona condenada a muerte tenga el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena;
- asegurar que no se condene a muerte ni se ejecute a personas que en el momento de cometer el delito fueran menores de 18 años;
- poner fin a prácticas como los actos públicos de imposición de sentencias y los paseos a los presos antes de la ejecución, que constituyen una forma de trato cruel, inhumano y degradante;
- asegurar que el ámbito de aplicación de la pena capital no se extienda más allá de "los delitos más atroces", y tratar de avanzar hacia la abolición total

de la pena de muerte, con medidas como la restricción del número de delitos punibles con este castigo.

Además de estas salvaguardias y restricciones, Amnistía Internacional acogería favorablemente el inicio de estudios oficiales sobre diversos aspectos de la aplicación de la pena de muerte, referentes a la política oficial, a su influencia en los índices de delincuencia, a su imposición discriminatoria en diversos sectores de la población, y a la conveniencia de la existencia de penas alternativas.

INTERNO (sólo para miembros de AI)

Indice AI: ASA 17/56/90/s
CHIRAN: 05/90
Distr: SC/CO/GR

Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Gran Bretaña

A: Todas las Secciones
Coordinadores de China
Grupos con presos chinos
Coordinadores de la red CHIRAN para transmisión
Grupos CHIRAN
Coordinadores de pena de muerte (sólo para información)

DE: Departamento de Investigación de Asia

FECHA: Septiembre de 1990

**ACCION DE GRUPO SOBRE LA REPUBLICA POPULAR CHINA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 1990**

**LA REPRESION CONTINUA: 3. LA PENA DE MUERTE
Y LAS CAMPAÑAS CONTRA LA DELINCUENCIA**

Resumen

Este documento sobre la aplicación de la pena de muerte en China se ha elaborado para la Acción de Grupo que se llevará a cabo entre septiembre y octubre de 1990. Es uno de los tres informes sobre la represión que sigue teniendo lugar en China. Los otros documentos externos son: The Continuing Repression: 1. Imprisoned Trade Unionists and Workers (La Represión Continúa: 1. Detención de trabajadores y sindicalistas), Indice AI: ASA 17/52/90, y The Continuing Repression: 2. Imprisoned Writers, Academics and Human Rights Activists (La Represión Continúa: 2. Detención de escritores, profesores universitarios y activistas de derechos humanos), Indice AI: ASA 17/58/90. Cada documento refleja cuestiones sobre las violaciones de derechos humanos en China que siguen preocupando a Amnistía Internacional.

Este documento expone la preocupación de Amnistía Internacional sobre el amplio uso de la pena de muerte en China, su carácter arbitrario y discriminatorio y su utilización política. Asimismo se citan críticas a la aplicación de la pena de muerte formuladas por expertos chinos. Este documento sirvió de base al comunicado de prensa internacional emitido el 13 de septiembre de 1990. Desgraciadamente, debido a retrasos en la producción, ha sido imposible ponerlo a disposición de los Grupos antes de la publicación del comunicado de prensa.

La Acción de Grupo se ha previsto para coincidir con la celebración de los Juegos Asiáticos que se celebrarán en Pekín, entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre de 1990, y con la Fiesta Nacional de China: el 1 de octubre. Este día se celebra la fundación de la República Popular China en 1949, que otros años se ha festejado con desfiles militares y otras ceremonias oficiales y públicas. Amnistía Internacional ha observado en el pasado que, a menudo, durante las semanas anteriores a la fiesta nacional y a otras fiestas importantes, se llevan a cabo un gran número de ejecuciones.

Amnistía Internacional aprovecha la celebración de los 11º Juegos Asiáticos y de la Fiesta Nacional de China para dar publicidad a las cuestiones que le siguen preocupando sobre este país en un momento en que la comunidad internacional seguirá de cerca los actos de Pekín y de otras ciudades chinas.

Además de estos tres documentos externos, se emitirán algunas circulares sobre la Acción de Grupo. Tengan en cuenta que los dos primeros documentos citados no se han enviado a las Secciones, pero aquellas Secciones que no tengan Grupos de coordinación, coordinadores de campaña o encargados de prensa pueden solicitarlos directamente al Departamento de Investigación de Asia del Secretariado Internacional. Las circulares que se emitirán son:

- .List of People detained for Activities related to the 1989 Pro-Democracy Movement, First Revision (Lista de personas detenidas por actividades relacionadas con el movimiento en favor de la democracia de 1989, primera revisión), Indice AI: ASA 17/54/90.
- .Summary List of People Detained for Activities related to the 1989 Pro-Democray Movement (Lista resumida de personas detenidas por actividades relacionadas con el movimiento en favor de la democracia de 1989), Indice AI: ASA 17/55/90.
- .List of Addresses (Lista de direcciones), Indice AI: ASA 17/57/90.
- .Order Form for Photographs (Hoja de pedido de fotografías), Indice AI: ASA 17/51/90.

Distribución

La indicada anteriormente.

Acciones recomendadas

1. Se solicita a las Secciones, Grupos de coordinación de China y coordinadores de la red CHIRAN que decidan la estrategia que van a adoptar y se aseguren de que todos los Grupos que participan reciben la información pertinente. En el SI se encuentran a su disposición fotografías, para uso no comercial, de ejecuciones judiciales llevadas a cabo en China.

2. Si lo desean, pueden concentrarse en llamamientos a las autoridades locales de zonas donde parece que la pena de muerte se aplica con especial frecuencia (véase la tabla de la página 4 del documento). No obstante, también deben enviar llamamientos a las autoridades centrales y a otras autoridades locales; el hecho de que se registre un número bajo de condenas a muerte en una provincia determinada puede deberse a que nuestra información es incompleta.

3. Deben enviar copias de todos los llamamientos a la representación diplomática de China en su país.

PUBLICIDAD

Las Secciones pueden utilizar como consideren oportuno las fotos, la lista de nombres de personas detenidas por su participación en el movimiento en favor de la democracia y los documentos externos sobre la represión que sigue teniendo lugar en China. Se solicita a todos los Grupos con casos de presos chinos que aprovechen esta ocasión para dar publicidad a los casos que se les han asignado.

LLAMAMIENTOS A LAS AUTORIDADES

- .Expresen preocupación por los centenares de condenas a muerte anunciadas y por las ejecuciones que, según los informes, han tenido lugar en China en los últimos meses.
- .Insten a que se ponga fin a todas las ejecuciones y a que se conmuten todas las condenas a muerte.
- .Expresen preocupación porque se ha ampliado recientemente el ámbito de aplicación de la pena de muerte, que actualmente abarca más de 40 delitos, de los cuales, muchos no implican el uso de la violencia. Hagan notar que las Naciones Unidas han respaldado el objetivo de la abolición mundial de la pena capital.
- .Insten a que se tomen medidas para poner fin a los actos públicos de imposición de sentencias y a los desfiles de reos de muerte antes de las ejecuciones. Expresen su oposición a estos actos y desfiles, que constituyen una forma de trato degradante, prohibido por la Convención de la ONU contra la Tortura, a la que se adhirió China en 1988.
- .Expresen preocupación por el carácter discriminatorio de la pena de muerte que, en China, tiende a afectar de forma desproporcionada a desempleados, campesinos y trabajadores.
- .Expresen preocupación porque el procedimiento judicial chino no se ajusta a las normas internacionales de imparcialidad procesal, y porque las consideraciones políticas pueden poner en peligro la objetividad de los procedimientos. Señalen que la práctica de "sentencia primero, juicio después", criticada por expertos chinos, contraviene las normas internacionales para la celebración de juicios con las debidas garantías.
- .Insten a que se le faciliten a todo preso acusado de un delito punible con la muerte todos los medios necesarios, incluida la libre elección de su abogado, para que sea juzgado con las debidas garantías ante un tribunal independiente, competente e imparcial; que a toda persona condenada a muerte se le conceda el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; que no se condene a muerte ni se ejecute a los que en el momento de cometer el delito fueran menores de 18 años; y que se protejan los derechos del acusado en todas las fases del proceso judicial.
- .Expresen preocupación por el hecho de que las autoridades retengan estadísticas generales y otra información sobre la pena de muerte, e insten a que se inicien estudios oficiales sobre diversos aspectos de la aplicación de

la pena de muerte en China, y que se hagan públicos sus resultados.

Los Grupos con presos chinos deben aprovechar esta ocasión para repetir los llamamientos a las autoridades en favor de sus presos. Los llamamientos deben ofrecer información general sobre el preso, sobre su detención y (si procede), sobre el juicio. Es importante incluir el nombre del preso en caracteres chinos, si es posible. (Véase Summary List of those Detained for their Involvement in the Pro-Democracy Movement --Lista resumida de personas detenidas por su participación en el movimiento prodemocrático--, Índice AI: ASA 17/55/90).